



SOLUCIONES INTEGRALES
ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES

Señores

JUZGADO TERCERO (3) CIVIL DEL CIRCUITO

Yopal - Casanare

E. S. D.

ASUNTO: RECURSO DE APELACIÓN

PROCESO RADICADO No. 8 5 0 0 - 3 1 - 0 3 - 0 0 3 - 2 0 1 9 - 0 0 0 3 9 - 0 0.

MEDIO DE CONTROL: EJECUTIVO DE MAYOR CUANTÍA

DEMANDANTE: PAOLA DURAN TRANSPORTES S.A.S.

DEMANDADO: MS CONSTRUCTORA Y SERVICIOS INTEGRADOS S.A.S.

Se dirige a usted **OSCAR DAVID SAMPAYO OTERO**, domiciliado en Yopal, identificado con la cédula de ciudadanía 72.289.894, abogado distinguido con la tarjeta profesional 192.670 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura. En el asunto sub examine actúo en representación del extremo pasivo. A través del presente documento me remito a su Señoría con la finalidad de instaurar recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia calendada del treinta (30) de octubre de dos mil diecinueve (2019), con fundamento en los siguientes acápites:

I. FUNDAMENTO JURÍDICO DE LOS RECURSOS INVOCADOS

Fundamento el recurso invocado en las previsiones normativas contenidas en los artículos 320 y subsiguientes de la Ley 1564 del 2012.

II. HECHOS JURÍDICAMENTE RELEVANTES

1. El día primero (01) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), la sociedad mercantil PAOLA DURAN TRANSPORTES S.A.S., distinguida con el NIT.900.846.416 - 6, representada legalmente por la señora Paola Isabel Durán Fernández, instauró mediante apoderado judicial, demanda ejecutiva de mayor cuantía en contra de la sociedad mercantil MS CONSTRUCTORA Y SERVICIOS INTEGRADOS S.A.S., distinguida con el NIT.900.926.843 - 1. El título valor base de la ejecución fue el pagaré No. P-79522045, por valor de ochocientos millones de pesos m/cte. (\$800.000.000). La demanda correspondió por reparto al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Yopal.
2. Mediante auto calendado el día diecinueve (19) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), el Juzgado Tercero (3) Civil del Circuito ordenó librar mandamiento de pago en favor de la sociedad mercantil PAOLA DURAN TRANSPORTES S.A.S. y en contra de la sociedad mercantil MS CONSTRUCTORA Y SERVICIOS INTEGRADOS S.A.S.
3. La representación judicial de la sociedad mercantil MS CONSTRUCTORA Y SERVICIOS INTEGRADOS S.A.S., interpuso recurso de reposición dentro del término legal en contra de la providencia que libró mandamiento ejecutivo de pago, puesto que consideró que el título base de la ejecución no cumplía con los requisitos legales para tal fin. El recurso fue incoado el día dieciocho (18) de junio del año dos mil diecinueve (2019).
4. El día veinticinco (25) de julio del año dos mil diecinueve (2019), la sociedad mercantil demandante PAOLA DURAN TRANSPORTES S.A.S. descorrió traslado del recurso interpuesto contra el auto que libró mandamiento de pago. En dicho documento anexó pruebas documentales y solicitó el decreto de otras.

✉ suj.yopai@hotmail.com

☎ 320 221 8194 - 321 563 7417



**SOLUCIONES INTEGRALES
ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES**

5. *Por medio de auto fechado el día nueve (09) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019,) el Juzgado Tercero (3) Civil del Circuito despacho resolvió el recurso de reposición interpuesto contra el mandamiento de pago. En la providencia resolutoria del recurso, el A quo dispuso mantener incólume el numeral primero del auto ejecutor.*
6. *Posteriormente, en fecha once (11) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), la sociedad mercantil demandada MS CONSTRUCTORA Y SERVICIOS INTEGRADOS S.A.S. presentó dentro del término contemplado en la ley la contestación de la demanda. En el escrito contestatario se enfatizó la existencia de un negocio jurídico subyacente entre la demandada y el señor Alvaro Gutierrez Acevedo.*
7. *Trabada la Litis, el despacho mediante auto fechado el día catorce (14) de agosto de 2020, efectuó el decreto de pruebas e igualmente fijó fecha para audiencia inicial que se llevó a cabo a partir del día ocho (08) de septiembre del año dos mil veinte (2020).*
8. *En audiencia llevada a cabo el día treinta (30) de octubre del año dos mil veinte (2020), el Juzgado Tercero (3) Civil del Circuito de Yopal profirió el fallo de primera instancia en el que resolvió seguir adelante con la ejecución en contra de la sociedad mercantil demandada MS CONSTRUCTORA Y SERVICIOS INTEGRADOS S.A.S., reconociendo la existencia de un pago parcial por valor de cien millones de pesos (\$100.000.000). En ese sentido, la ejecución continuó por la suma de setecientos millones de pesos m/cte. (\$700.000.000).*
9. *Finalmente, en providencia emanada por el honorable Juzgado Tercero (3) Civil del Circuito de Yopal, calendada el veintidós (22) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), la Jueza dispuso dar traslado a las partes apelantes para que por escrito sustenten el recurso de alzada, el cual deberá remitirse a la dirección de correo electrónica sectsyopal@cendoj.ramajudicial.gov.co*

III. ANALISIS JURÍDICO Y SUSTENTACIÓN DEL RECURSO

Se considera que no existió por parte del Juzgado Tercero (3) Civil del Circuito de Yopal una valoración objetiva de la situación fáctica que esgrimiera la demandada en la contestación de la demanda y de las actuaciones sucesivas. La Jueza al emanar el fallo de primera instancia no realizó un análisis del conjunto de pruebas aportadas por las partes en este asunto, pues de lo contrario habría determinado situaciones diversas a las conjugadas en la sentencia. En primer lugar, al no dársele la valoración apropiada a la promesa de compraventa que fuera suscrita por la sociedad MS CONSTRUCTORA Y SERVICIOS INTEGRADOS y por el señor ÁLVARO ANTONIO GUTIÉRREZ ACEVEDO el día catorce (14) de noviembre del año dos mil quince (2015). Con dicha promesa de compraventa la falladora determinó que la cuantía del negocio jurídico celebrado entre la demandada y la demandante fue de ochocientos millones de pesos m/cte. (\$800.000.000), pero no tuvo en cuenta el pago que fuera efectuado por la demandada en favor de la demandante en la fecha indicada en el citado documento, pago por valor de trescientos cincuenta millones de pesos m/cte. (\$350.000.000) con base en el cual se elevó el negocio jurídico a escritura pública No. 360 de quince (15) de febrero dos mil dieciséis (2016). Es decir, respecto de la promesa de compraventa la señora Jueza hizo una valoración parcializada en favor de la parte demandante, pues sí reconoció la cuantía del negocio (\$800.000.000) pero no el pago parcial realizado por la demandada (\$350.000.000)

✉ siaj.yopal@hotmail.com

☎ 320 221 8194 - 321 563 7417



En la audiencia de lectura de fallo de fecha treinta (30) de octubre del año dos mil veinte (2020), la señora Juez conoció varios indicios que dan solidez a lo esbozado en el párrafo anterior. Un primer indicio es la renuencia del señor ÁLVARO ANTONIO GUTIÉRREZ ACEVEDO en comparecer a la audiencia a rendir su declaración. Surge el interrogante siguiente: ¿Por qué a la señora SANABRIA se le hicieron escrituras del terreno de veinte hectáreas, las cuales se desprenden del terreno rural de mayor extensión denominado “**EL CENTINELA**”, ¿aun a pesar de presuntamente no haber cancelado? Bien se indica en las declaraciones rendidas por los testigos tanto de la parte demandante como demandada, que el señor ALVARO ANTONIO GUTIERREZ ACEVEDO, en negocios de compraventa de terrenos, hasta no cancelar la totalidad de la obligación de la compraventa de bienes inmuebles no realizaba las respectivas escrituras, configurándose así un comportamiento típico de la costumbre mercantil colombiana. Lo anterior es un indicio en materia probatoria que refuerza más la teoría del pago parcial de la obligación. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, la palabra indicio denota: “el fenómeno que permite conocer o inferir la existencia de otro no percibido”; de otra parte, tres son las disposiciones que el estatuto procesal civil dispone para efectos de regular los indicios como medio de prueba, los cuales los encontramos en los artículos 240 a 242 del Código General del proceso. Adicional a lo anterior, el doctrinante PARRA QUIJANO destaca el indicio como un hecho que tiene especial propiedad de mostrar otro desconocido “pero lo puede mostrar porque se encuentra dentro de unas circunstancias que lo transforman de neutro a indicador”¹. Es fundamental resaltar que la renuencia a comparecer al proceso toma vital importancia a la hora de desarrollar el indicio en lo que concierne a acreditar el pago parcial de la obligación contenida en el pagaré, puesto que el comportamiento del señor ALVARO ANTONIO GUTIERREZ ACEVEDO es un indicio especialmente cualificado porque tiene la propiedad de salirse de sí mismo y mostrar otro.

El art. 240 del Código General del Proceso exige que el indicio “deberá estar debidamente probado en el proceso”, con lo cual establece que será a través de otros medios de prueba que deberá acreditarse el mismo; así, es dable llegar a la conclusión que los documentos aportados por la parte demandante como son la promesa de compraventa del terreno y la escritura pública No. 360 junto con los testimonios practicados y rendidos por los señores ALVARO GUTIERREZ HERNANDEZ, BERENIEL SANCHEZ Y ANA GUTIERREZ, son el soporte de lo que el jurista Hernán Fabio López Blanco determina como hecho conocido, y de los cuales se va a realizar la inferencia. Los testimonios rendidos por las personas antes relacionadas, permiten aseverar que, el señor ALVARO ANTONIO GUTIERREZ ACEVEDO tenía por costumbre realizar las escrituras de terrenos enajenados por compraventa, sólo hasta que se cancelara la totalidad de la obligación, situación que es la misma con la señora MARTHA ISABEL SANABRIA CRUZ, puesto que al existir el pago parcial de la obligación por el total de CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$450.000.000), era admisible que el señor Álvaro diera la orden de realizarle las respectivas escrituras a mi mandante, no sin antes hacerle suscribir un pagaré en blanco, con el cual se solventaría el saldo restante de la obligación, que bien se pagaría en efectivo o mediante las comisiones de venta de las que tanto se ha hablado en el proceso que nos convoca.

¹ PARRA QUIJANO Jairo, Tratado de la Prueba Pericial, Indicios y Presunciones, Tomo IV, pag 28.



IV. REPAROS EN CONCRETO

1. VALORACIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO SUBYACENTE A CONVENIENCIA DEL DEMANDANTE

La demandante, en el escrito que describió traslado del recurso de reposición interpuesto contra el auto que libró mandamiento de pago, manifiesta que título valor base de la ejecución Pagaré No.79522045, fue diligenciado como garantía de un negocio jurídico subyacente celebrado entre la sociedad mercantil **MS CONSTRUCTORA Y SERVICIOS INTEGRADOS S.A.S.**, distinguida con el NIT.900.926.843 – 1 y el señor **Álvaro Antonio Gutiérrez Acevedo**, esto es un contrato de compraventa suscrito en fecha catorce (14) de noviembre del dos mil quince (2015) cuyo objeto fueran los predios identificados como Lote No 2 y Lote No 4 que se segrean de un predio de mayor extensión, con folio de matrícula inmobiliaria No 470-0012082.

Pues bien, del contenido del mentado contrato habrá que resaltar que como forma de pago se estableció la entrega de la suma de trescientos cincuenta millones de pesos (\$350.000.000) que debían pagarse el día treinta y uno (31) de enero de dos mil dieciséis (2016) y una suma restante de cuatrocientos cincuenta millones (\$450.000.000) que se pagarían el día treinta (30) de julio de dos mil dieciséis (2016).

Adicional a ello, según se sustrae de la lectura de la Escritura Pública No. 360 del quince (15) de febrero del año dos mil dieciséis (2016) de la Notaria Segunda del Círculo de Yopal, el señor **Álvaro Antonio Gutiérrez** transfirió el dominio de los inmuebles prometidos en venta a la hoy demandante empresa **PAOLA DURAN TRANSPORTES S.A.S.**, el dos (02) de diciembre del año dos mil quince (2015) (mediante escritura pública N 3143 de la Notaria Segunda de Yopal).

Es justo esa la razón por la que el señor **Álvaro Antonio Gutiérrez Acevedo**, según lo confirma la señora **PAOLA ISABEL DURAN FERNANDEZ** al momento de ser interrogada por el despacho, la “autorizó” para suscribir la escritura pública en favor de mi prohijada, la cual se reitera se realizó el quince (15) de febrero del dos mil dieciséis (2016), es decir, que para dicha fecha se había cumplido con el pago parcial del negocio jurídico celebrado con el señor **Álvaro Antonio Gutiérrez Acevedo** y es que el motivo de la protocolización no pudo ser otro que la certeza de pago por parte del promitente comprador.

Es importante recalcar que en el desarrollo de este proceso se ha logrado establecer la clara injerencia del señor **Álvaro Antonio Gutiérrez Acevedo** en el manejo de la empresa **Paola Duran Transportes S.A.S.**, por tratarse esta de una empresa familiar en la que si bien es cierto figura como cabeza visible su nuera la señora **Paola Duran**, no es menos cierto que el señor **Álvaro Gutiérrez** influye considerablemente en las decisiones. Lo acá enunciado se fundamenta en las aseveraciones rendidas por el señor **Álvaro Gutiérrez Hernández** (hijo), quien es esposo de la señora **Paola Duran** quien puntualmente manifestó que la empresa pertenecía a sus padres.

Ahora bien, teniendo en cuenta la trayectoria de esta familia en el sector inmobiliario y en especial la del señor **Álvaro Antonio Gutiérrez Acevedo**, es necesario apelar a la costumbre mercantil para inferir que en ningún caso podría suscribirse la escritura pública del contrato de compraventa habiéndose superado un plazo de pago por parte del comprador sin que este hubiese dado cumplimiento al mismo, de allí que no se comparta la posición del fallador cuando convalida el negocio jurídico subyacente como justificante de la suma incorporada en el título valor base de la ejecución, pero sin realizar mayor reparo



respecto de las demás situaciones que se suscitaron en torno a este y en especial, la del pago parcial efectuado por la demandada MS CONSTRUCTORA Y SERVICIOS INTEGRADOS S.A.S. En ese sentido, la providencia objeto de alzada comporta un notorio desmedro a los intereses patrimoniales de la demandada puesto la Juez Tercera (3) Civil del Circuito solamente valoró las pruebas en favor de la demandante, a pesar de que había situaciones que favorecían de la demandada.

2. DESCONOCIMIENTO DE LA VERDAD MATERIAL COMO CRITERIO ORIENTADOR DEL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL

Asimismo, se considera que la señora Juez Tercera (3) Civil del Circuito de Yopal no procuró la consecución de la verdad material en el asunto de marras, o de procurarla, fue en extremo tendenciosa en favor de la parte demandante. Por consiguiente, se invocarán dos de los deberes contenidos en el artículo 42 del Código General del Proceso que consideramos fueron omitidos por la administradora de justicia en primera instancia y que atentan contra la búsqueda de la verdad material, estos se desarrollarán a profundidad ulteriormente:

“...2. Hacer efectiva la igualdad de las partes en el proceso, usando los poderes que este código le otorga.

(...)

“5. Adoptar las medidas autorizadas en este código para sanear los vicios de procedimiento o precaverlos, integrar el litisconsorcio necesario e interpretar la demanda de manera que permita decidir el fondo del asunto. Esta interpretación debe respetar el derecho de contradicción y el principio de congruencia.”.

Para la Corte Constitucional, “Los lineamientos de la ley no eximen la responsabilidad de valorar los elementos probatorios en conjunto, en procura de lograr la verdad material, lo contrario puede implicar fallos desproporcionados e incompatibles con los postulados constitucionales e inclusive legales²”. En idéntico sentido, la Corte concluyó que la omisión de incorporar y, en consecuencia, de valorar una prueba solicitada en el proceso y requerida para establecer la verdad material de los hechos, configura un defecto procedimental³.

Ahora bien, la Juez Tercera (3) Civil del Circuito de Yopal no practicó la prueba de testimonio al señor Álvaro Gutiérrez Acevedo. Esta omisión no permitió establecer la verdad material total. De otra parte, gracias a otros testimonios que si fueron rendidos en este asunto, así como una prueba documental aportada por la demandante posteriormente, se sustrajo una verdad material parcial que favoreció exclusivamente a la parte actora. La verdad material parcial a la que llegó la Juez consistió en la existencia de otro negocio jurídico subyacente producto de una promesa de compraventa que determinó la existencia de la obligación contenida en el título valor pagaré, pero la misma prueba no fue tomada en cuenta para acreditar el pago de parcial de la obligación contenida en el título valor pagaré. En ese orden de ideas, se solicitará la práctica de dicho testimonio conforme a lo normado en el artículo 327 del C.G.P.

² SU-573/17, Corte Constitucional.

³ SU-062/18, Corte Constitucional.



Deber contemplado en el numeral 2 del artículo 42 de la Ley 1564 de 2012. “Hacer efectiva la igualdad de las partes en el proceso, usando los poderes que este código le otorga”

Uno de los principios rectores que informan las actuaciones procesales es el de la “igualdad de las partes”. A voces del artículo 4 del C.G.P. se sustrae que el juez debe hacer uso de los poderes que le otorga dicha codificación para procurar esta igualdad. Por su parte, el artículo 11 ibídem refiere que, en la interpretación de las normas procesales, el juez deberá garantizar “(...) el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los demás derechos constitucionales fundamentales”.

Contrario a los presupuestos de igualdad, se advierte una portentosa desigualdad en la que incurrió el a quo, formalizada en la sentencia recurrida en apelación. La operadora judicial que preside el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Yopal valoró parcialmente una pieza documental que fuera aportada por la demandante a través del documento con el que emitiera pronunciamiento a las excepciones, conocido en el argot judicial como “descorre traslado a excepciones”. Nos referimos a la promesa de compraventa fechada el catorce (14) de noviembre del año dos mil quince (2015). El análisis que en su momento efectuara la Juez sobre el citado documento le permitió derivar consecuencias adversas a la parte demandada, no tanto así a la parte demandante. Es así que se avizora una desigualdad al momento de validar el negocio jurídico (Promesa de compraventa).

Respecto de la compraventa se sustraen favorablemente consecuencias en pro de las pretensiones de la demandante como lo es acreditar la cuantía de la obligación. En forma adversa a las excepciones de la parte demandada, no se tiene en cuenta dicho documento para efectos de acreditar el pago de la suma de trescientos cincuenta millones de pesos m/cte. (\$350'000.000). Es del caso mencionar que la suma dineraria indicada sí fue pagada por la demandada a la demandante, pues es costumbre de la sociedad mercantil Paola Durán Transportes S.A.S. protocolizar los negocios jurídicos de compraventa por medio de escritura pública sólo hasta que sus clientes hayan pagado el precio del inmueble. El A quo en la audiencia de instrucción y juzgamiento alude a dicha costumbre de la demandante, a pesar de ello, reitero, se limita a abstraer consecuencias jurídicas favorables exclusivamente en beneficio de la ejecutante.

Deber consagrado en el numeral 5 del artículo 42 de la Ley 1564 de 2012. “Adoptar las medidas autorizadas en este código para sanear los vicios de procedimiento o precaverlos, integrar el litisconsorcio necesario e interpretar la demanda de manera que permita decidir el fondo del asunto. Esta interpretación debe respetar el derecho de contradicción y el principio de congruencia”.

El principio de congruencia es una regla de derecho procesal citado en el numeral 5 del artículo de Ley 1564 de 2012 y abordado con más rigor en el artículo 281 de la misma ley. Cumplir con tal principio implica por parte del Juez, que este, además de los hechos esgrimidos en la demanda y en las excepciones, tenga en cuenta cualquier otro hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio ocurrido después de haberse propuesto la demanda.

En el asunto de marras, se advierte la incorporación de nuevos hechos como consecuencia de un documento que aportará la demandante con posterioridad a la demanda, la promesa de compraventa. El nuevo hecho introducido al proceso con dicha prueba fue la realización de un nuevo negocio jurídico subyacente entre las personas jurídicas



SOLUCIONES INTEGRALES
ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES

demandante y demandada. De estos nuevos hechos la señora Juez Tercera Civil del Circuito dedujo la existencia de la obligación contenida en el título valor pagaré ejecutado. Sin embargo, omitió las razones alegadas por el suscrito tendientes a acreditar que, con el mismo documento de promesa de compraventa, se efectuó el pago parcial de la obligación capital, por valor de trescientos cincuenta millones de pesos m/cte. (\$350'000.000).

En lo que concierne a este punto, se concluye que hubo incongruencia en la sentencia, habida cuenta que la operadora judicial desconoció el hecho probado del pago parcial por la suma indicada con antelación, que fuera igualmente alegado o puesto de presente a la misma Jueza por parte de la parte demandada y su respectivo abogado.

En síntesis, la Juez de primera instancia no dedujo una verdad material total sino parcial, por cuando si bien tuvo en cuenta las pruebas inicialmente aportadas con la demanda y la contestación, no practicó el testimonio del señor Álvaro Gutiérrez Acevedo que pudiera propugnar por una verdad material total. Adicionalmente, sólo interpretó en favor de la ejecutante la promesa de compraventa que aportó con posterioridad a la demanda, no tanto así en favor de la demandada quien pagó la suma dineraria de trescientos cincuenta millones de pesos (\$350'000.000) establecida en dicha promesa de compraventa.

V. PRUEBAS

Conforme a lo preceptuado en el art.327 del Código General del Proceso, le solicito honorable Juez se practique el testimonio del señor ALVARO GUTIERREZ ACEVEDO, toda vez que pese a ser decretado, este no compareció al proceso.

VI. PRETENSIONES

1. Revocar la sentencia en primera instancia proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Yopal (Casanare) de fecha treinta (30) de octubre de dos mil veinte (2020) y consecuentemente, tener por probadas las excepciones de “Mala fe del demandante, incongruencia con el negocio jurídico subyacente originario del título valor pagaré, pago total de la obligación como excepción de la acción cambiaria derivada del negocio jurídico subyacente entre las mismas partes”.

Del señor Juez, muy respetuosamente.

OSCAR DAVID SAMPAYO OTERO

C.C.72.289.894

T.P.192.670 Del. C. S. de la J.



siaj.yopal@hotmail.com



320 221 8194 - 321 563 7417

RE: 2 0 1 9 – 0 0 0 3 9 / EJECUTIVO DE MAYOR CUANTÍA / DEMANDANTE: PAOLA DURAN TRANSPORTES S.A.S. / DEMANDADO: MS CONSTRUCTORA Y SERVICIOS INTEGRADOS S.A.S. / ASUNTO: RECURSO DE APELACIÓN

Secretaria Tribunal Superior - Yopal - Seccional Tunja <sectsyopal@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Lun 8/03/2021 9:23 PM

Para: Oscar David Sampayo Otero <oscarsampayo5@hotmail.com>

Doctor
Oscar David Sampayo Otero

Cordialmente acuso recibido

Atentamente

Cesar Armando Ramírez López
Secretario

De: Oscar David Sampayo Otero <oscarsampayo5@hotmail.com>
Enviado: martes, 2 de marzo de 2021 3:54 p. m.
Para: Juzgado 03 Civil Circuito - Casanare - Yopal <j03cctoyopal@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Secretaria Tribunal Superior - Yopal - Seccional Tunja <sectsyopal@cendoj.ramajudicial.gov.co>; ABOGADOSYOPAL2@HOTMAIL.COM <ABOGADOSYOPAL2@HOTMAIL.COM>
Asunto: 2 0 1 9 – 0 0 0 3 9 / EJECUTIVO DE MAYOR CUANTÍA / DEMANDANTE: PAOLA DURAN TRANSPORTES S.A.S. / DEMANDADO: MS CONSTRUCTORA Y SERVICIOS INTEGRADOS S.A.S. / ASUNTO: RECURSO DE APELACIÓN

Señores
JUZGADO TERCERO (3) CIVIL DEL CIRCUITO
Yopal - Casanare
E. S. D.

ASUNTO: RECURSO DE APELACIÓN
PROCESO RADICADO No. 8 5 0 0 - 3 1 – 0 3 – 0 0 3 – 2 0 1 9 – 0 0 0 3 9 – 0 0.
MEDIO DE CONTROL: EJECUTIVO DE MAYOR CUANTÍA
DEMANDANTE: PAOLA DURAN TRANSPORTES S.A.S.
DEMANDADO: MS CONSTRUCTORA Y SERVICIOS INTEGRADOS S.A.S.

Se dirige a usted **OSCAR DAVID SAMPAYO OTERO**, domiciliado en Yopal, identificado con la cédula de ciudadanía 72.289.894, abogado distinguido con la tarjeta profesional 192.670 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura. En el asunto sub examine actio en representación del extremo pasivo. A través del presente medio digital, **remito a su Señoría documento en formato PDF contentivo de un recurso de apelación contra sentencia** de primera instancia emanada en el asunto indicado en el epígrafe.

Nota. El presente correo es remitido a la dirección electrónica del apoderado judicial de la demandada: Abogadosyopal2@hotmail.com

OSCAR DAVID SAMPAYO OTERO
Abogado.